

EL RECUADRO

Los datos de los últimos meses parecen confirmar que el largo proceso de deterioro económico que ha sufrido España en los últimos años ha tocado a su fin. Pero la crisis financiera global, transmitida a la demanda de bienes de inversión y duraderos, y posteriormente a la de los bienes de consumo y los servicios, ha dejado una estela de empresas desaparecidas y empleo destruido que será difícil borrar.

Ya se registran avances de la actividad productiva, sin crecimiento de los precios y con mejora en las condiciones de financiación y se está produciendo un aumento anual de unas 350.000 iniciativas empresariales, al mismo tiempo que, en los últimos años, las empresas exportadoras han pasado en España de 100.000 a 150.000.

Pero la recuperación es todavía frágil y será difícil que las empresas, de las que depende realmente la solidez y la continuidad del proceso de superación de la crisis, abandonen la desconfianza con la que ahora se enfrentan a nuevos proyectos e inversiones, sin que se profundice en las imprescindibles reformas estructurales que exige nuestra economía.

Si bien es cierto que las reformas de los últimos años han permitido amortiguar algunos defectos de la crisis y en algunos ámbitos reforzar nuestra posición competitiva, no lo es menos que en su gran mayoría se han quedado a medio camino del papel que podrían haber jugado como motores más potentes para mitigar primero, y superar después, la profundidad de la crisis.

Muchas veces se ha situado, con buen criterio, el punto central de esta crisis y de los problemas de nuestra economía en general, en el modelo de crecimiento basado en sectores que incorporan menos tecnología y formación y un mayor componente especulativo. Las soluciones, por tanto, deben apuntar al cambio de ese modelo por otro que debería tener como núcleo central la Industria.

Ese cambio de modelo es la primera gran reforma, la transición hacia una economía basada en la eficiencia de las empresas, la cualificación del personal, la mejora de la capacidad de ahorro, la inversión en I+D+i, el sostenimiento de la inversión en infraestructuras y el fomento de la iniciativa empresarial.

Se trata de mejorar la productividad y la competitividad del conjunto de nuestra economía, con una legislación y un sistema fiscal que no penalicen las inversiones productivas en equipos, en innovación en procesos y productos, en calidad o en formación, ámbito este último en el que la reciente reforma, lejos de mejorar la situación, será un serio obstáculo para la cualificación de los trabajadores y la competitividad de las empresas.

Se necesita mejorar las relaciones laborales y la flexibilidad en lo que se refiere a contratación y movilidad funcional y geográfica, reducir los costes sociales que recaen actualmente sobre las empresas perjudicando su competitividad y actuando como un impuesto a la creación de empleo, y reformar el impuesto de sociedades.

Es necesario seguir modernizando la estructura de la negociación colectiva, abriéndola en nuevos aspectos que permitan adaptar las condiciones laborales en las empresas a los cambios cada vez más rápidos que sufre la economía.

Es imprescindible limitación de la enorme dispersión normativa que perjudica decisivamente la actividad económica y pone en peligro la unidad de mercado. Hay que actuar contra la descoordinación entre las distintas administraciones y la sobrerregulación, de las que se derivan costes e inseguridad jurídica, que perjudican la competitividad del conjunto del sistema.

Es necesaria una gran reforma energética, a partir de una definición seria y consensuada de las verdaderas necesidades, para que el futuro suministro de energía deje de ser fuente de incertidumbres y de mayores costes para las empresas, que están limitando su capacidad de crecimiento, la actividad y la competitividad.

Es necesario también ir más allá en la eliminación de la actual cultura comercial permisiva y mejorar el sistema judicial, lento y costoso, que benefician la morosidad y las prácticas abusivas en las relaciones comerciales.

El camino se ha iniciado, pero apenas se han recorrido las primeras etapas, y una recuperación sólida exige ambición y esfuerzo a la hora de aplicar reformas estructurales porque nuestros competidores no dudan. Es una peligrosa ingenuidad creer que los problemas se han superado o que pueden resolverse con soluciones parciales y poco ambiciosas.

La actual situación exige un proyecto de futuro, una definición seria que fije sus horizontes a medio y largo plazo, medidas valientes y eficaces que permitan cambiar la orientación de nuestra economía para que vuelva a ser capaz de crear riqueza y empleo, y lo haga más protegida frente a ciclos adversos de lo que ha estado hasta ahora.